



¿SOCIALDEMOCRACIA O IZQUIERDA MODERADA? UN ANÁLISIS DE LOS CASOS DE CHILE Y URUGUAY EN EL COMIENZO DEL SIGLO XXI *

Social Democracy or Moderate Left? An analysis of cases from Chile and Uruguay in the beginning of XXI century

Gabriel Carrizo¹ gabo.carrizo@gmail.com

Recibido: 8 de diciembre de 2009 **Aprobado:** 23 de agosto de 2010

Resumen: En el inicio del siglo XXI, la mayoría de los países de América del Sur han dado un “giro a la izquierda”, intentando poner en cuestionamiento las bases del neoliberalismo implantadas en la década del '90 del siglo precedente. Asimismo, ha surgido en el ámbito académico y en algunos medios de comunicación una taxonomía que busca hacer distinción entre los actuales gobiernos de Bolivia, Venezuela, Ecuador y Argentina -por un lado-, y Brasil, Chile y Uruguay -del otro-. Los primeros serían -según este esquema- gobiernos populistas, y los segundos ejemplos de gobiernos socialdemócratas. En este artículo expondremos el debate en torno a la viabilidad de gobiernos socialdemócratas en América Latina. Luego, revisaremos la historia política reciente de Chile y Uruguay. La hipótesis que guía este trabajo es que, al menos en Chile y Uruguay, no estaríamos frente a ejemplos de socialdemocracia, sino más bien de izquierdas moderadas que evitan cuestionar los principios neoliberales.

Palabras Clave: Socialdemocracia – América latina – Uruguay – Chile – Partidos Políticos.

Abstract: In the beginning of the XXI century, a majority of South American countries had experienced a “left turn,” trying to put into question the foundations of the neoliberalism implemented in the decade of the 90s of the previous century. It has also emerged in the academic scope and in some media a taxonomy that seeks to distinguish the current

* Agradezco los minuciosos comentarios del evaluador anónimo del artículo.

¹ Magíster en Partidos Políticos por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Docente de los Departamentos de Historia y Geografía, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de la Patagonia, Sede Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina. Investigador en el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia (IESyPPat) y miembro del Grupo de Estudios en Historia Social (GEHISO). Becario Doctoral de CONICET. Doctorando en Estudios Sociales de América Latina, en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba.

governments of Bolivia, Venezuela, Ecuador, Argentina and Brazil, on one side, and Chile and Uruguay on the other. The first group of countries would be –according to this scheme– populist governments and the second group would be examples of social democratic governments. In this paper we will expose the debate about the viability of social democratic governments in Latin America. Then, we will review the contemporary political history of Chile and Uruguay. The hypothesis that guides this work is that, at least in Chile and Uruguay, we would not be seeing examples of social democracy, but rather of the moderate left who avoid challenging the neoliberal principles.

Keywords: Social democracy – Latin America – Uruguay – Chile – Political parties.

“La democracia bipartidista, que es el modelo predominante en Europa y América del Norte, también caracteriza a países latinoamericanos como Chile, Brasil y Uruguay. Sus rasgos fundamentales son dos. De un lado, el consenso básico entre las dos fuerzas políticas principales acerca de las reglas de juego que presiden su competencia. Del otro, la equivalencia electoral entre ellas, la cual permite prever que habrán de alternarse pacíficamente en el poder según pasen los años. Estos dos caracteres otorgan a la democracia bipartidista una perspectiva de larga estabilidad porque los inversores de adentro y de afuera saben de antemano que, sea cual sea el partido que ejerza el poder, las reglas de juego no cambiarán. (...)

Llamamos dictadura de origen democrático, en cambio, al segundo de los modelos políticos de América latina porque en él un partido, que ha llegado al poder mediante elecciones democráticas, no está dispuesto a conceder a sus rivales el reconocimiento del pluralismo, aspirando al contrario a monopolizar la vida política. Este es su componente dictatorial. En los países que pertenecen a esta categoría, en lugar de la concordia prevalece la discordia, la desunión nacional, cuya vigencia anticipa un futuro de inestabilidad. A este segundo tipo de régimen pertenecen Venezuela bajo Chávez y Bolivia bajo Morales.

Varios países latinoamericanos vacilan hoy entre los dos regímenes políticos mencionados. Si el presidente Kirchner llega a completar su proyecto dictatorial, la Argentina pasará a integrar el lote de las dictaduras de origen democrático.”²

² “América latina, ¿es una sola o varias?”, *La Nación*, 23 de Julio de 2006.

I. INTRODUCCIÓN

Por estos días, este tipo de afirmaciones se ha dispersado en Argentina tanto en los medios de comunicación como en los ámbitos académicos. Quien firma la editorial que encabeza este artículo es el periodista Mariano Grondona, vocero en los medios de comunicación de la derecha argentina. De sus palabras podemos advertir que en la actualidad dos modelos antagónicos atraviesan la realidad política latinoamericana: de un lado, la “democracia bipartidista” (en términos de Grondona) o social – democracia: modelo previsible, estable, de alternancia política, en donde no se rompen las reglas del juego político; del otro, la “dictadura de origen democrático” o el populismo: demagógico, en donde prevalece la discordia, y por ende, inestables e imprevisibles.

En este trabajo retomaremos esta discusión, pero enfocando nuestro análisis en los casos de Chile y Uruguay. Estos dos sistemas políticos han sido ponderados como ejemplos de la socialdemocracia latinoamericana, junto al Brasil de Lula da Silva. Particularmente nos interesa buscar algunas diferencias que nos permitan relativizar el éxito generalizado que se les ha atribuido, teniendo en cuenta las leves reformas aplicadas al modelo neoliberal imperante en ambos países y las deudas con el pasado que arrastran.

En cuanto a la organización del artículo, en primer lugar presentaremos algunas discusiones en torno a las implicancias del rótulo de socialdemocracia que han recibido los tres casos anteriormente señalados. En las siguientes dos secciones revisaremos la actualidad política de Uruguay y Chile, haciendo referencia también a la historia política de cada país. Finalmente, presentaremos nuestras conclusiones.

II. ¿SOCIALDEMÓCRATAS EN AMÉRICA LATINA?: LA DISCUSIÓN

Hay quienes sostienen que luego de la re-estructuración neoliberal ha surgido una variante latinoamericana de social–democracia, es decir, una alternativa que combina la

democracia representativa con una economía de mercado e iniciativas del Estado para reducir las desigualdades y promover la ciudadanía social. Jorge Lanzaro (2008) ha sostenido en este sentido que lo que identifica a los gobiernos social democráticos es que son experiencias protagonizadas por una izquierda “institucional”: tanto por el grado de institucionalización que presentan los partidos políticos, como por su integración a la competencia electoral y al régimen democrático republicano.

Estas estructuras partidarias presentan altos niveles de institucionalización que contribuyen a la estabilidad de sus respectivos sistemas políticos, manifestando niveles de volatilidad electoral relativamente bajas. Asimismo, estos partidos desarrollan la condición de partidos de tipo electoral (o catch all), al experimentar una importante moderación ideológica para interpelar de manera efectiva a un amplio espectro del electorado. Como veremos en los casos a analizar, esta moderación ha significado resignar algunos objetivos. Lanzaro afirma que:

Estos fenómenos sobrevienen en América latina (como han ocurrido en Europa) una vez que las izquierdas descartan caminos más radicales y aceptan la ‘restricción democrática’, en sus dos dimensiones. En primer lugar, la competencia electoral como vía apropiada y exclusiva para llegar al gobierno. En segundo lugar, a partir de ello (como dato fundamental e igualmente distintivo) el acatamiento de la normatividad republicana, mediante procesos de gobierno que transitan por las instituciones democráticas, en régimen de ‘frenos y contrapesos’, con cierta dosis de equilibrio político (Lanzaro, 2008, p.50).

Sin embargo, para Kenneth Roberts (2008), este tipo de sistemas políticos no re-actualizan en América Latina las clásicas socialdemocracias europeas. Para este autor, existirían sustanciales diferencias entre la socialdemocracia europea y la latinoamericana. En primer lugar, la democracia social en América latina no deriva de un proceso de industrialización intensiva como si ocurrió en Europa. En segundo lugar, en la socialdemocracia europea se contaba con una vigorosa clase trabajadora que aportaba cimiento social al proyecto socialdemócrata; en cambio, en América latina encontramos hoy mercados de trabajo fragmentados. En tercer lugar, si bien la democracia social europea está compuesta por países abiertos al mercado exterior, contaban con Estados que intervenían fuertemente en los mercados financieros y en la política monetaria y fiscal. Por

su parte, los proyectos social demócratas en América latina deben lidiar con la realidad que impone la globalización del mercado.

A partir de estas notorias diferencias, Roberts señala que las izquierdas en Chile, Uruguay y Brasil,

son fuerzas o coaliciones relativamente institucionalizadas que operan en regímenes democráticos que se encuentran entre los más consolidados de América Latina, y en sistemas de partidos que los enfrentan a serios oponentes de centro o de derecha. En resumen, se mueven en contextos de pluralismo institucionalizado, con mecanismos de control que ponen límites a sus ambiciones reformistas. Todos llegaron al poder a través de una alternancia en el gobierno que refleja la madurez, antes que la crisis, de los sistemas democráticos (Roberts, 2008, p.94).

Esta izquierda pos marxista latinoamericana, ha experimentado el trauma de los tiempos dictatoriales y es por ello que ha abandonado / resignado el objetivo de máxima (la revolución), acomodándose al juego de la democracia representativa y conformándose con establecer reformas cautelosas al modelo neoliberal. Para Roberts, este modelo de no impugnación del neoliberalismo ha generado mayores niveles de integración social, a través de reformas graduales en políticas sociales, mejorando los ingresos y la calidad de vida de aquellos sectores mas desfavorecidos. Sin embargo, la elaboración de políticas macro económicas sigue estando muy restringida por las presiones del mercado mundial.

Precisamente, uno de los interrogantes a plantear en este artículo es si esa institucionalización del sistema partidario que resaltan algunos autores está directamente relacionada con la decisión de continuar (con leves reformas) los principios neoliberales. Teniendo en cuenta esta última afirmación, en las siguientes secciones abordaremos los casos de Uruguay y Chile, en el marco de lo que algunos autores han denominado “la resurrección de las izquierdas en América latina” (Moreira, 2009).

III. URUGUAY: EL FRENTE AMPLIO Y UN “CAPITALISMO EN SERIO”

La mayor novedad del sistema de partidos uruguayo en los últimos años estuvo

dado por el crecimiento sostenido en su base de poder del Frente Amplio (FA). A tal punto esta coalición partidaria ha sido exitosa, que no solamente ha comenzado el siglo XXI siendo por primera vez gobierno, sino que ha sido catalogada como una “opción de izquierda progresista viable en la región” (Ratto, 2006: 219).

El sistema de partidos uruguayo ha sido uno de los más estables e institucionalizados dentro del siglo XX latinoamericano. Dos factores han contribuido a ello: en primer lugar, la cooperación entre las tradicionales fuerzas políticas (el Partido Blanco y el Partido Colorado) dada la mutua necesidad para gobernar; en segundo lugar, la temprana consagración de un sistema institucionalizado de políticas sociales de carácter universalista, con capacidad de integrar a la mayoría de la población.

Hasta mediados de la década del '60 el uruguayo ha sido un sistema de partidos bipartidista, hasta que en las elecciones de 1971 el FA puso en cuestión esta condición, para convertirse en un sistema tripartidista. Incluso, el FA redefinió el sistema de partidos: debido a su sostenido crecimiento, las organizaciones políticas existentes se han realineado llegando a formarse coaliciones entre el Partido Blanco y el Partido Colorado, dos fuerzas históricamente adversarias.

Este éxito del FA se explica en gran parte por la instalación en el imaginario social uruguayo el de ser un país en crisis. A mediados de los años '50, en ocasión del comienzo de la crisis del modelo de desarrollo basado en la sustitución de importaciones, comenzó a sedimentarse la idea de un país en constante deterioro, elemento que pasó a postularse como un rasgo idiosincrático de la cultura uruguaya (Aínsa Amigues, 2007). Es por ello que Daniel Buquet afirma:

el crecimiento electoral de la izquierda se alimenta de un desencanto político de los uruguayos que comenzó bastante antes de la irrupción exitosa de la izquierda en el escenario electoral y cuyo impacto no consiste exclusivamente en engrosar su caudal electoral sino que también se manifiesta en un proceso de circulación electoral entre y dentro de los partidos tradicionales. El sistemático crecimiento electoral de la izquierda política está relacionado con la capacidad de los partidos no tradicionales, especialmente del Frente Amplio, de capitalizar electoralmente esa crónica disconformidad de los uruguayos (Buquet, 2008, p.256).

Adolfo Garcé y Jaime Yaffé, a partir de recorrer su experiencia histórica, han afirmado que el FA ha evolucionado gradualmente. El denominado Frentismo fundacional (1971 -1984) debutó en la competencia electoral consiguiendo el 18,3% de los votos en las elecciones de marzo del '71, obteniendo el tercer puesto, poniendo en riesgo la matriz bipartidista del sistema de partidos uruguayo. El dato novedoso era que los grupos políticos que integraban el FA se inscribían dentro del paradigma marxista. Se declaraban anti capitalistas, adherían al socialismo como meta de su acción política y las concepciones revolucionarias predominaban sobre las reformistas, en el marco de una muy pobre valoración de la democracia como sistema político.

Luego del golpe de estado de 1973, desde la proscripción el FA se opuso férreamente al régimen, y mantuvo su programa fundacional hasta los inicios del proceso de re-democratización de Uruguay en 1984. Recién a partir de 1985, la izquierda experimentaría el inicio de su reformulación ideológica, en el marco del debate público. Tanto el derrumbe del sistema socialista como la obtención de la intendencia de Montevideo en elecciones municipales, generaron condiciones para la profundización del debate iniciado. Los frentistas comenzaron a otorgarle valor a las formalidades democráticas luego del costo humano que implicó la dictadura, aunque los más apegados al leninismo seguían teniendo con la democracia una relación conflictiva.

Asimismo la experiencia de gobierno municipal de Tabaré Vazquez enfrentó por primera vez a la izquierda a la necesidad de administrar recursos escasos para formular y ejecutar políticas públicas. Desde Montevideo el FA pudo demostrar su capacidad gubernativa, con la implementación de programas con vistas a mejorar la calidad de vida de sus habitantes y la participación ciudadana. A partir de esta gestión el FA pudo proyectarse al resto del territorio. Según Panizza (2006), el control del gobierno local le permitió a Tabaré ganar experiencia administrativa, formar cuadros técnicos y ampliar su base social. Además, al acelerar el proceso de renovación ideológica y programática, la izquierda comenzó a utilizar el lenguaje, hasta entonces patrimonio exclusivo de la derecha liberal, de la competencia y la eficiencia.

El debate también impulsó a algunos grupos que conformaban el FA a que expusieran la necesidad de articular una alianza más amplia que incluyese a sectores políticos de los partidos políticos tradicionales. De allí surgió la posibilidad de actualizar el programa fundacional del FA. De esta manera, en 1991, a través del denominado “Documento de los 24”, una parte considerable de la izquierda mostró su disposición a revisar algunos postulados ideológicos, programáticos y estratégicos.

De allí en más, construir alianzas más amplias pasó a ser el objetivo del FA. En función de ello, Tabaré Vázquez montó dos operativos políticos: primero, trabajó para ampliar, en sucesivos círculos concéntricos, las alianzas políticas de la izquierda uruguaya; segundo, impulsó un proceso sostenido de “actualización ideológica”. Es decir, “el FA, sin abandonar la izquierda, se fue expandiendo hacia el centro, al tiempo que captaba todo el beneficio del descontento ciudadano, que se fue incrementando con los resultados de la reformas estructurales y, desde 1999, con la crisis económica y social hasta el punto culminante alcanzado a mediados del 2002” (Garcé-Yaffé, 2006: 104).

Tabaré Vázquez y su entorno comprendieron que la victoria electoral solo era posible una vez que el programa de la izquierda se hubiera moderado lo suficiente como para conquistar el electorado de centro, en general, y el del interior del país, en particular. De allí que esta nueva izquierda uruguaya pocas veces haga referencia al marxismo, y posea una definición socialista laxa, muy vinculada a la crítica de la globalización y el neoliberalismo. La izquierda ha sustituido el ideal de la revolución por una aproximación reformista y gradualista. En síntesis:

la moderación del programa de la izquierda durante los últimos años va mucho más allá de un mero ‘maquillaje’ electoral motivado en la obtención del apoyo de electores centristas incautos. La izquierda uruguaya ha cambiado profundamente: es mucho más democrática que la de 1971; del antiimperialismo original no conserva más que la vocación y, hasta cierto punto, la retórica; el socialismo dejó de ser una meta concreta relativamente inmediata para convertirse en un horizonte lejano o, directamente, en una utopía; el ‘progresismo’ se conforma con construir (...) un capitalismo ‘en serio’, y con ejecutar políticas de redistribución del ingreso (Garcé-Yaffé, 2006, p.89).

Entre 1995 y 2004, la izquierda demostró ser una construcción política urbana, con fuerte vinculación con los ámbitos sindicales e intelectuales. Una vez fortalecida en Montevideo, avanzó hasta los espacios donde los niveles de urbanización e industrialización eran mayores, y aglutinó un electorado más joven, mejor educado y más urbano.

El 1 de marzo de 2005 asumió Tabaré Vázquez la presidencia de la Nación a partir de la victoria electoral con mayoría en ambas cámaras del Parlamento. Esta situación inédita implicó que el FA debió hacerse cargo por sí mismo de sus éxitos o fracasos sin poder responsabilizar al Parlamento de bloquearlo ni al sistema político de falta de cooperación.

Durante este gobierno se ha percibido una revalorización de la democracia, optando por la profundización y ampliación de la misma. Asimismo, se le sigue asignando una relevancia central al Estado, pero se ha incorporado al mismo tiempo una visión más optimista del papel del mercado: el FA postula un nuevo estatismo moderado. Por otro lado, de la idea de lucha de clases y de conflicto social, se ha pasado a la necesidad de concertación y acuerdos. En síntesis:

Desde el punto de vista ideológico, el ‘progresismo’ uruguayo puede ubicarse en forma bastante precisa dentro del molde de la socialdemocracia, aunque en una versión más a la izquierda que la europea contemporánea. No reniega del socialismo como meta última aunque asume que la tarea del presente es desarrollar un capitalismo ‘en serio’ y con justicia social. Probablemente por ello, a pesar de las notorias coincidencias señaladas, la izquierda uruguaya reniega de proclamarse decididamente social demócrata. En este sentido, la renuncia de la socialdemocracia europea al socialismo y su aceptación del capitalismo como forma superior de organización de la sociedad, así como el giro a la derecha que evidenciaron desde los noventa algunos de los principales partidos socialdemócratas, con extremos como el del laborismo británico, son posiciones en las que el FA, en consonancia con los mayores partidos de izquierda latinoamericanos, no se reconoce (Garcé-Yaffé, 2006, p.106-107).

Actualmente, si bien el FA posee un carácter policlasista y presenta una heterogeneidad ideológica, a la vez contiene una serie de factores que han contribuido a su institucionalización como partido político. En primer lugar, una estructura interna con representación territorial en los departamentos del interior y una organización especial en

Montevideo que unifica y le da un carácter homogéneo a la totalidad de la fuerza; en segundo lugar, impera el carácter de unicidad tanto en los aspectos pragmáticos como programáticos; en tercer lugar, manifiesta un accionar político encaminado a la búsqueda de consensos (si bien ha logrado mantener su capacidad de diferenciación respecto del entorno partidario, ha sabido negociar y ha cooperado con los diferentes gobiernos); y en cuarto lugar, realiza elecciones primarias internas para la selección de candidaturas. Según María Celeste Ratto, “este partido desde sus inicios supo aprovechar el vacío dejado por las agrupaciones políticas ante la inminente llegada de la dictadura, y se establece como una alternativa basada en los principios del Estado de Bienestar, que adopta el reclamo de la ciudadanía e intenta constituirse como herramienta de viabilización de las demandas de la sociedad” (Ratto, 2006, p.242).

Sin embargo, a pesar de algunas medidas exitosas del gobierno frenteamplista, algunos autores sostienen que no logró darle un efectivo giro a la izquierda a la historia uruguaya. En este sentido dice Carlos Moreira:

han sido tales los déficit y vacíos de su gestión que prácticamente en cinco años no se ha logrado ningún cambio (importante o relevante) en el statu quo del país, con estancamiento en las áreas de salud, sistema impositivo, educación, política exterior y reforma del Estado, y fracasos y retrocesos en transparencia, funcionamiento de la justicia, seguridad ciudadana, calidad de las instituciones, igualdad de género y manejo de la información y libertad de prensa (Moreira, 2009, p.5).

Como hemos visto en esta sección, pareciera no haber consenso en torno a un verdadero cambio con la década del '90, en donde el neoliberalismo se instaló como discurso hegemónico. Pasaremos a revisar a continuación el caso de Chile.

IV. CHILE: LA CONCERTACIÓN Y LA IMPOSIBILIDAD DE REVISAR EL MODELO ECONÓMICO NEOLIBERAL

Chile también se ha caracterizado por la estabilidad de su sistema político anclado fundamentalmente en la democracia de partidos. Este rasgo central de la política chilena es posible de ser observado desde las elecciones de 1932 (mediante las cuales llegó al

gobierno al representante de la centro–derecha Arturo Alessandri), que evidenciaron el crecimiento de una corriente de izquierda capaz de atraer una parte importante del electorado; pero, principalmente a partir de la concreción del proyecto del Frente Popular en 1936 y su posterior llegada al poder en 1938. El Frente Popular significó una importante experiencia política, generando condiciones para que el sistema político hiciera gala durante gran parte del siglo XX de una estabilidad y continuidad señalada por varios analistas como inédita en los países del cono sur. Varias razones explican el éxito del Frente Popular: la incapacidad de la coalición de derecha de llevar adelante un proyecto político, el carácter reformista de las propuestas del Frente y por último, un factor considerado clave: la incorporación de los partidos de izquierda al sistema político institucional (Alabart, 2003).

Hasta 1970, el sistema político chileno era visto por las fuerzas políticas que lo componían, como un sistema equitativo de oportunidades. Esto permitió que entre 1932 y 1970 las fuerzas sociales hayan preferido la acción política institucionalizada. A partir del gobierno de Salvador Allende, se resquebrajarían las condiciones ideológicas que permitieron la histórica colaboración entre el centro y la izquierda: “había desaparecido la izquierda que consideraba que la ‘modernización desarrollista’ era una etapa indispensable de la ‘revolución chilena’ y había surgido una izquierda movida por la ansiedad del socialismo. Tampoco existía la otra condición imprescindible: un centro que necesitara de la izquierda, y que (como los radicales de antaño) fundara su propio poder en la capacidad de atraerse a la izquierda. Más bien existía un centro que pretendía desplazarla, cuyo sueño era ser ‘lo popular’, pero sin dejar de ser las otras cosas que también era” (Moulián, 1997, p.107).

En las elecciones de 1970, el sistema político presentaría importantes novedades: se produciría el aislamiento de la Democracia Cristiana a partir de su incapacidad de obtener votos de los extremos ideológicos y el campo de fuerzas políticas se estructuraría en tres tercios. La victoria de Salvador Allende provocaría un clima político paranoico en 1970, materializado en la recurrente violencia callejera de las manifestaciones políticas, tanto de los sectores de izquierda como de la derecha (Palieraki, 2003). Según Leonardo Mazzei de

Grazia (2004), una de las áreas económicas que sufrió una transformación estructural en Chile durante los años de la Unidad Popular fue la estructura latifundista. En efecto, mediante la reforma agraria, que prometía acelerar la división de la tierra, se profundizaría la política impulsada por el gobierno anterior de la Democracia Cristiana (la denominada “Revolución en Libertad” de Eduardo Frei Montalva). Sin embargo, este proceso se vio en cierto sentido desvirtuado por la acción de los sectores más radicalizados de la coalición gobernante que promovieron junto con el campesinado la toma de tierras que no estaban bajo el proceso de reforma. La otra área afectada fue la explotación del cobre, en donde la Unidad Popular, con el apoyo del parlamento, quitó los derechos de su explotación a Estados Unidos, lesionando importantes intereses económicos. Asimismo, mediante la creación del Área de Propiedad Social, el Estado avanzó sobre la propiedad de empresas manufactureras particulares.

Para Moulian, la crisis política de la cual Chile no va a tener retorno, es posible hallarla entre los años 1971 y 1973, fechas que marcan el vaciamiento del centro político, dando lugar a una polarización política que desencadenaría un clima de guerra: “durante esa época hay un deterioro de la legitimidad formal, concentrada más en el discurso que en la práctica. Se desarrolla una crítica ‘esencialista’ de la democracia política, un menosprecio de las reglas de la competencia política, en función de la preferencia por lo sustantivo, por las finalidades de igualdad (...) El problema no se gestaba por la existencia de partidos con pretensiones de ‘superar’ el capitalismo, sino por el desarrollo del ‘esencialismo revolucionario’. Entonces el interés por la materialización de ciertos fines, revestidos de una importancia absoluta, generará una conciencia elástica sobre los medios. Se atropellarán las reglas de equidad y de reciprocidad, sin las cuales no puede existir verdadera competencia por el poder. En esas condiciones la política es redefinida, convirtiéndose en guerra” (Moulián, 1997: 120 – 121). Es claro para Tomás Moulián, que uno de los elementos decisivos para el desencadenamiento del golpe en Chile en 1973 lo constituyó el deterioro de la cooperación política.

El 11 de septiembre de 1973 asumiría el poder el General Augusto Pinochet, cuyo régimen revertiría violentamente dos de los objetivos que dieron forma al proyecto político

chileno durante gran parte del siglo XX: democracia y justicia social. Para Paul Drake, luego de la instauración del régimen dictatorial es posible detectar el debilitamiento del movimiento obrero chileno en su rol económico, en su posición institucional y en su poder político. El modelo neoliberal paralizó al sindicalismo, dejando a los obreros sin capacidad para presionar ante los empresarios y ante el Estado. Los militares alejaron a los sindicalistas más combativos, eliminaron las confederaciones y federaciones nacionales, quitaron los derechos básicos de asociación y acción sindical y actividades políticas. Según Drake, “en general, se deterioró la remuneración, la estabilidad, la calidad y las condiciones de trabajo. Para sobrevivir, los trabajadores tuvieron que llegar a ser más flexibles, individuales y silenciosos. No pudieron dedicarse fácilmente a los sindicatos, a las negociaciones colectivas o a las luchas de clase” (Drake, 2003: 150).

Asimismo, los embates sufridos por el movimiento obrero chileno son parte de un proceso de cambios en los patrones de estratificación social desplegado luego de 1973 que darían lugar al pasaje desde un modelo más o menos distributivo hacia uno excluyente, aumentando la distancia entre el promedio de ingresos de los empleadores con respecto a los grupos populares (Manzano Chávez, 2006). Los sectores medios, que entre 1960 y 1970 se vieron favorecidos gracias al desarrollo de los aparatos burocráticos, con el régimen militar sufrirían un importante descenso dada la disminución del peso del Estado. Asimismo, el proceso de des-industrialización desplegado por la dictadura afectaría tanto a los asalariados como a los no asalariados. Pero serían los obreros quienes se verían más afectados por estos cambios en la estructura social. Entre 1970 y 1973 este grupo fue uno de los más beneficiados con la puesta en marcha por parte de la Unidad Popular de la capacidad ociosa de muchas industrias y el traspaso de algunas de ellas de manos privadas al sector público. Desde los inicios de la dictadura, la participación de los obreros en la estructura ocupacional disminuyó, debido a que uno de los mecanismos utilizados para superar la crisis de 1973 fue la contracción del empleo, en especial entre obreros y empleados vinculados al sector fiscal y público.

A partir de fines de la década del '80 la dictadura comenzó a experimentar un serio desgaste, lo cual facilitó la re-articulación de las fuerzas políticas con vistas a iniciar un

proceso de re-democratización. Aquí conviene recordar los contenidos del pacto de transición, el cual “estableció las reglas básicas del juego político y que incluía aceptación de la constitución, la no alteración de los fundamentos de la economía, y una estrategia reformista de transformación social y política. Tampoco implicaba un cuestionamiento mayor sobre los niveles de participación ciudadana ni respecto del fortalecimiento de la capacidad de negociación de los débiles frente a los poderosos” (Alvarez-Fuentes, 2009, p.4).

En este sentido, la Concertación de Partidos por la Democracia se fundó a fines de los '80 con la firme convicción de obtener el poder. Entre sus objetivos programáticos más importantes figuraban: primero, derrotar a Pinochet en el plebiscito de 1988; en segundo lugar, iniciar la transición política a un régimen democrático (1989-1990); y en tercer lugar, durante los '90 ejecutar la eliminación progresiva de los enclaves autoritarios dejados por el régimen militar. Pero la herencia dictatorial persiste en tiempos de democracia, ya no por la presencia de Pinochet, sino por la tibieza manifestada en el programa de gobierno de la coalición de partidos políticos que detenta el poder desde la caída del régimen (Moulian, 2006).

En la actualidad, la Concertación chilena aún mantiene algunas cuentas pendientes. En primer lugar, no ha derogado la Constitución pinochetista de 1980, y por lo tanto, no ha promovido una real reforma política. A pesar de sus más de diez años de democracia, Chile continua con una Constitución impuesta por la dictadura; y en campos como el económico o el educativo, se desenvuelve en el marco de la institucionalidad heredada del régimen militar. Dice Garretón:

Si se ha podido mantener la coalición entre la izquierda y la democracia cristiana se debe, en buena parte, a que los socialistas han tenido que ceder en muchas de sus propuestas como, por ejemplo, en el tema institucional-constitucional. Chile es el único país del mundo que, salvo Argentina que no tuvo constitución militar, no ha hecho constitución democrática después de una larga dictadura (Garretón, 2006, p.90).

Aún persiste el sistema electoral binominal, el cual ha sido por naturaleza excluyente. Y como indica Garretón, le da a la minoría de derecha, heredera de la dictadura,

un 50 % de los escaños en el Congreso. Esto ha significado que los partidos políticos que no caben dentro de los límites de las grandes coaliciones quedan fuera del Parlamento, provocando el desinterés por la participación. Esta ha sido la situación del Partido Comunista chileno desde 1989. En el caso del socialismo, con la dictadura pinochetista aprendió que si pretende realizar aquellas transformaciones que la sociedad necesita, no puede darse el lujo de gobernar sola. En efecto, la izquierda ha sido totalmente incapaz de gobernar sola y seguirá así por largo tiempo; hoy por hoy, tiene que hacerlo en coalición, principalmente, con la democracia cristiana. La izquierda está obligada a formar coaliciones y disputar dentro de ellas el liderazgo. Tomás Moulian sostiene al respecto:

El partido Socialista dejó de ser un partido marxista, alineado con la visión socialista de la revolución, y se convirtió en un partido de orientación socialdemócrata. Este hecho ha sido trascendental para el cambio global del sistema. Ya el sistema de partidos no tiene una distancia ideológica antagónica entre los extremos. Combinado con esto, el sistema electoral binominal hace su papel y deja fuera del Parlamento a los partidos de izquierda más extremos quienes no tienen acceso a una coalición que les permita convertir sus votos en escaños parlamentarios. El sistema de partidos deja de ser un sistema con polaridad y se convierte en un sistema consensual, en cuyos márgenes orbitan sin éxito partidos extra-consenso (Moulián, 2002, p.244).

En segundo lugar, Chile ha mantenido las políticas neoliberales, y con ellas, las desigualdades socioeconómicas. En este sentido se ha señalado que existe un consenso tácito entre las elites políticas en cuanto al mantenimiento de los fundamentos del modelo económico neoliberal. Este acuerdo, instaurado desde los inicios de la transición a la democracia, “tranquilizó a las poderosas elites económicas cuya reacción a un posible cambio en la política podría haber sido extraordinariamente desestabilizadora. Inversionistas internacionales fueron asegurados de la estabilidad económica y de un panorama confiable de inversión” (Siavelis, 2009: 16). A esto se han dedicado principalmente los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, cuestión que ha originado el rótulo de “izquierda neoliberal” (Gomez Leyton, 2009). Este consenso sustantivo implica que en los discursos de la Concertación y de la derecha no se observen diferencias decisivas. Es por ello que Juan Carlos Gómez Leyton caracteriza a la sociedad chilena como una “sociedad neoliberal avanzada o triunfante. En estas sociedades neoliberales triunfantes la mayoría de las fuerzas sociales y políticas han aceptado y adoptado el neoliberalismo. No hay un mayor cuestionamiento a lo existente. Todos son

‘neoliberales’ tanto los de derecha como los de izquierda” (Gómez Leyton, 2008: 167). Chile sigue teniendo niveles de pobreza significativos agravados por la fuerte desigualdad social y económica. En síntesis, el socialismo chileno durante la década de los ’90 adoptó y perfeccionó los principios económicos y sociales del neoliberalismo, lo que implicó la renuncia política al proyecto revolucionario de transformación de la sociedad capitalista y el abandono de la utopía socialista. En otras palabras “la sociedad chilena, bajo los gobiernos concertacionistas y socialistas, pasa de un capitalismo ‘autoritario’ neoliberal a un capitalismo ‘democrático’ neoliberal” (Gomez Leyton, 2009: 3).

V. CONCLUSIONES

Como hemos visto al comienzo de este artículo, tanto en los ámbitos académicos como en los medios de comunicación, se ha asentado la tesis acerca de la existencia en la América Latina actual de dos izquierdas: una pragmática, sensata y moderna representada por Chile, Brasil y Uruguay; y otra demagógica, nacionalista y populista, presente en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina y México. Al ampliar los contenidos de esta diferencia, se ha sostenido que:

La ‘izquierda pragmática’ acepta con resignación el predominio del libre mercado, mientras que la ‘izquierda idealista y demagógica’ pregona un discurso no sólo ‘antineoliberal’ sino incluso anticapitalista y busca dismantelar la libertad del mercado; la ‘izquierda democrática’ reconoce sin ambivalencias las reglas del juego político y está comprometida con las instituciones de la democracia representativa, mientras que la ‘izquierda populista’ considera la democracia y el estado de derecho como formalidades que no pueden limitar la expresión de la voluntad popular; la ‘izquierda moderada’ ha comprendido que la política exige un manejo gradual y negociado de la agenda pública, mientras que la ‘izquierda radical’ apuesta por cambios poco consensuados y ofrece resolver los problemas de manera absoluta (Ramírez Gallegos, 2005, p.32).

Sin embargo, el sociólogo ecuatoriano Franklin Ramírez Gallegos ha sostenido que esta división taxativa esconde una visión maniquea de la política (populistas malos, socialdemócratas buenos) y las particularidades con las cuales han emergido los gobiernos de izquierda en la región. El autor afirma que, si bien esas dos izquierdas tienen en común la voluntad de recuperar el rol del Estado y mejorar la situación social en un contexto de superación de la agenda neoliberal, la izquierda ha asumido una forma específica en cada país, de acuerdo a las herencias institucionales del neoliberalismo, el lugar de los

movimientos sociales y la trayectoria histórica de los partidos progresistas. Es por ello que habla de “diversidad del campo progresista”.

En este trabajo hemos analizado la denominada “izquierda pragmática” o “socialdemocracia” en América Latina representada por los casos de Chile y Uruguay. En el breve recorrido por la última experiencia política de estos países hemos tenido en cuenta los contextos de emergencia de las dos izquierdas. En el caso de Chile, estamos ante una coalición de izquierda desgastada por las casi dos décadas de gobierno. Incluso algunos analistas han afirmado que estaríamos ante el fin de la Concertación: atravesada por disputas internas y la creciente pérdida de legitimación ante la ciudadanía debido a los escándalos de corrupción (Mardones, 2007). Si bien la coalición no está fracturada, comienza a exhibir fisuras que ponen en duda su continuidad, provocando un serio desencanto ciudadano. Por ejemplo, en cuestiones programáticas tales como la viabilidad del modelo económico neoliberal: se ha afirmado recientemente que “el cambio político no implicó una modificación sustantiva y estructural del proceso de acumulación neoliberal” (Gomez Leyton, 2009: 2).

En el caso de Uruguay, en la actualidad todavía atraviesa por la novedad del FA, que vino a oxigenar y revitalizar el sistema político. Algunos autores han destacado con respecto a los anteriores gobiernos que el FA ha marcado una continuidad en política económica pero que ha provocado fuertes transformaciones en la recuperación de derechos laborales y avances significativos en el tema de los Derechos Humanos. Asimismo, ha sabido sortear hasta el momento las dificultades que toda coalición de partidos supone, pues ha administrado la interna sin demasiado dramatismo y ha consolidado su capacidad de iniciativa política. Además, algunos analistas han observado el rol activo del FA en materia de reformas sociales. La preocupación por los altos niveles de pobreza se ha visto evidenciado a partir de la puesta en acción del denominado Plan Equidad y la creación del Ministerio Social. Todo esto nos indica que el FA ha aumentado el nivel de intervención estatal en materia social, para intentar recuperar el legado histórico de bienestar en Uruguay.

En efecto, los dos casos analizados nos muestran que la viabilidad de un proyecto progresista en América Latina es sólo posible si va de la mano de una izquierda moderada, que sólo debe conformarse con realizar tímidas reformas en un inalterable modelo neoliberal. Pareciera ser que esta sería la condición ineludible para que los grandes poderes económicos de la región asuman sin tanto prejuicio que algunos países cuenten con sistemas democráticos y gobernados por partidos políticos de centro-izquierda. En este sentido, destacaremos finalmente la postura de Chantal Mouffe (2003) en cuanto a su preocupación en torno al desdibujamiento de la división entre la izquierda y la derecha, provocado por el movimiento hacia el centro político que han adoptado la mayoría de los partidos socialistas. Esto ha generado cierto vaciamiento del componente anticapitalista del proyecto socialdemócrata, cuestión que obliga más que nunca a una revitalización de un proyecto progresista como alternativa al neoliberalismo en la región.

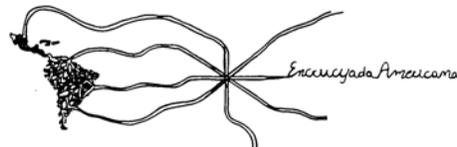
BIBLIOGRAFÍA

- Aínsa Amigues, Fernando (2007) “La utopía de la democracia en Uruguay. Entre la nostalgia del pasado y el desmentido de la historia”, *América Latina Hoy*, diciembre, nº 47, Universidad de Salamanca, Salamanca, España.
- Alabart, Mónica (2003) “El Frente Popular como respuesta a la crisis de dominación oligárquica en Chile (1920 – 1938)”, en Ansaldi, Waldo (editor), *Tierra en llamas. América Latina en los años 1930*, La Plata, Ediciones al Margen.
- Álvarez, Gonzalo – Fuentes, Claudio (2009) “Las promesas inconclusas de Bachelet”, *Metapolítica*, nº 65, julio – agosto, México. Disponible en: www.metapolitica.com.mx
- Buquet, Daniel (2008) “El irresistible ascenso de la izquierda al gobierno en Uruguay”, en Moreira, Carlos – Raus, Diego – Gómez Leyton, Juan Carlos (coord.) *La Nueva política en América Latina. Rupturas y continuidades*, Flacso Uruguay, Universidad Arcis, Universidad Nacional de Lanús, Ediciones Trilce, Montevideo.
- Caetano, Gerardo (2007) “Del triunfo electoral a los desafíos del gobierno. El primer tramo del gobierno del Frente Amplio”, en Cheresky, Isidoro (comp.) *Elecciones presidenciales y giro político en América Latina*, Buenos Aires, Manantial.
- Drake, Paul (2003) “El movimiento obrero en Chile: de la Unidad Popular a la Concertación”, *Revista de Ciencia Política*, año /vol. XXIII, número 002, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.

- Garcé, Adolfo – Yaffé, Jaime (2006) “La izquierda uruguaya (1971 – 2004): ideología, estrategia y programa”, *América Latina Hoy*, diciembre, vol. 44, Universidad de Salamanca, Salamanca, España.
- Garretón, Manuel Antonio (2006) “La izquierda chilena contemporánea”, *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, enero – abril, año, vol. XLVIII, n° 196, Universidad Nacional Autónoma de México, Distrito Federal, México.
- Gómez Leyton, Juan Carlos (2008) “Gobernabilidad social en los tiempos de Michelle Bachelet. Política, sociedad civil y ciudadanía”, en Moreira, Carlos – Raus, Diego – Gómez Leyton, Juan Carlos (coord.) *La Nueva política en América Latina. Rupturas y continuidades*, Flacso Uruguay, Universidad Arcis, Universidad Nacional de Lanús, Ediciones Trilce, Montevideo.
- ----- (2009) “Bachelet, la ‘izquierda neoliberal’ en Chile”, *Metapolítica*, n° 65, julio – agosto, México. Disponible en: www.metapolitica.com.mx
- Lanzaro, Jorge (2001) “Democracia presidencial y alternativas pluralistas. El caso uruguayo en perspectiva comparada”, en Cheresky, Isidoro – Pousadela, Inés (comp.) *Política e instituciones en las nuevas democracias latinoamericanas*, Paidós, Buenos Aires.
- ----- (2008) “La Socialdemocracia criolla”, *Nueva Sociedad*, Caracas, n° 217, septiembre / octubre.
- Lissidini, Alicia (2002) “Uruguay y la centralidad de la política”, en Cavarozzi, Marcelo – Abal Medina, Juan Manuel, *El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal*, Homo Sapiens Ediciones, Rosario.
- Manzano Chávez, Liliana (2006) “Estratos y clases sociales en Chile 1973 – 1990”, *Revista de Sociología*, 20, Universidad de Chile.
- Mardones Z. Rodrigo (2007) “Chile: todas íbamos a ser Reinas”, *Revista de Ciencia Política*, Pontificia Universidad Católica de Chile, Vol. 27, n° 2.
- Mazzei de Grazia, Leonardo (2004) “Chile: del Estado desarrollista y empresario a la revolución neoliberal. Una síntesis”, en Ansaldi, Waldo (coord.), *Calidoscopio latinoamericano. Imágenes históricas para un debate vigente*, Buenos Aires, Ariel.
- Midaglia, Carmen – Antía, Florencia (2007) “La izquierda en el gobierno: ¿cambio o continuidad en las políticas de bienestar social?”, *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, N° 16, ICP, Montevideo.
- Morales, Pamela (2009) “La Ley de Caducidad en Uruguay: dimensiones y tensiones de las leyes de impunidad y olvido en las democracias pos – dictatoriales del Cono Sur”, en feierstein, Daniel (comp.) *Terrorismo de Estado y genocidio en América Latina*, Buenos Aires, Prometeo Libros, EDUNTREF.

- Moreira, Carlos (2009) “La izquierda de un país en crisis. El Frente Amplio en Uruguay (2005 – 2010)”, *Metapolítica*, n° 65, julio – agosto, México. Disponible en: www.metapolítica.com.mx
- Moreira, Constanza (2009) *Entre la protesta y el compromiso. La izquierda en el gobierno. Uruguay y América Latina*, Montevideo, Ediciones Trilce.
- Mouffe, Chantal (2003) *La paradoja democrática*, Barcelona, Gedisa.
- Moulian, Tomás (1997) “Tensiones y crisis política: análisis de la década del sesenta”, en ANSALDI, Waldo, *Partidos y sistemas de partidos en América Latina*, Documento de Trabajo 62, serie II, UDISHAL, Buenos Aires.
- ----- (2002) “El sistema de partidos en Chile”, en Cavarozzi, Marcelo – Abal Medina, Juan Manuel, *El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal*, Homo Sapiens Ediciones, Rosario.
- ----- (2006) “El gobierno de Michelle Bachelet: las perspectivas de cambio”, *OSAL. Observatorio Social de América Latina*, CLACSO, Año VII, N° 19.
- Palieraki, Eugenia (2003) “Las manifestaciones callejeras y la experiencia de la Unidad Popular (1970 – 1973)”, en *Pensamiento Crítico*, Revista electrónica de Historia, Chile, n° 3.
- Panizza, Francisco (2006) “La marea rosa”, Ponencia, *Jornadas Populismos y gobiernos de izquierda en América Latina*, 19 y 20 de septiembre, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.
- Ramírez Gallegos, Franklin (2005) “Mucho más que dos izquierdas”, *Nueva Sociedad*, Caracas, N° 205.
- Ratto, María Celeste (2006) “El surgimiento de una alternativa de izquierda viable: análisis del caso del Frente Amplio”, en Abal Medina, Juan Manuel, *Los senderos de la nueva izquierda partidaria*, Prometeo Libros, Buenos Aires.
- Roberts, Kenneth (2008) “¿Es posible una social – democracia en América Latina?”, en *Nueva Sociedad*, Caracas, n° 217, septiembre – octubre.
- Selios, Lucía (2006) “Los últimos diez años de la cultura política uruguaya: entre la participación y el desencanto”, *América latina Hoy*, diciembre, vol. 44, Universidad de Salamanca, Salamanca, España.
- Siavelis, Peter. M, “Enclaves de la transición y democracia chilena”, *Revista de Ciencia Política*, Universidad Católica de Chile, Vol. 29, N° 1, 2009.

- Yaffé, Jaime (2005) *Al centro y adentro. La renovación de la izquierda y el triunfo del Frente Amplio en Uruguay*, Montevideo, Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.



Revista Encrucijada Americana. Año 3. N° 2. Primavera-Verano 2009-2010.

Universidad Alberto Hurtado

Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales

Cienfuegos 46 "A", 2° Piso, Santiago, Chile. Teléfono (56-2) 889 7476.

Email: america@uahurtado.cl